

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

Referencia: Expediente No. 34665

Acta No. 27

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de ARTURO DELGADO ACOSTA, SERVIO TULIO DÍAZ TORRES, IRMA TERESITA DE JESÚS DORADO PARDO, BETTY ESPINOSA DE VALBUENA, RODOLFO FUQUENE SILVA, EFRAIN ANTONIO GALEANO GÓMEZ, VÍCTOR MANUEL GAMA MONTAGUT, ELENA GARCÍA DE LÓPEZ, JORGE ARGEMIRO GARCÍA GARCÉS, ANA ROMELIA GARZÓN ROZO, PEDRO GUTIÉRREZ L., JOSELYN HURTADO FIGUEROA, DARÍO JARAMILLO BOTERO, LIBARDO LANCHEROS VELÁSQUEZ Y MARGARITA LEÓN TELLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 17 de enero de 2007, en el proceso seguido por los recurrentes contra el BANCO DE LA REPÚBLICA.

1-. ANTECEDENTES

En lo que interesa al recurso impetrado, se precisa lo siguiente:

Los demandantes pretenden que se condene a la demandada a reliquidar la pensión inicial de los actores y a pagar las diferencias que de ello se deriven.

Sustenta sus súplicas en que: (i) Los actores estuvieron vinculados laboralmente con la demandada; (ii) La accionada les reconoció a los demandantes pensión de jubilación con anterioridad al 31 de diciembre de 1972; (iii) No obstante, ser la entidad bancaria de derecho público, ésta afirma que el régimen privado es el que regula los reajustes de las pensiones reconocidas; y (iv) En las pensiones reconocidas no se tuvo en cuenta la prima convencional de vacaciones para calcular el salario base de liquidación, factor salarial reconocido a los actores. Como tampoco se le aplicaron los reajustes ordenados por la Ley.

La demandada se opone a las pretensiones. Para tal efecto propone las excepciones de:

inexistencia de las obligaciones demandadas, compensación, cobro de lo no debido, carencia del derecho, falta de título y causa y prescripción.

SENTENCIA A QUO

Mediante fallo del 1 de marzo de 2004, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C. absolvió a la demandada de todas las pretensiones de la demanda, declarando probada la excepción de prescripción.

II-. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En grado de consulta, el Ad quem confirmó la providencia de primera instancia, sustentando su decisión en las siguientes consideraciones:

“Origen de la aplicación de la prima de vacaciones a la base salarial para liquidar la pensión. Pese a que dentro del expediente se visualizan algunas convenciones colectivas de Trabajo suscritas entre el Banco de la República y la Asociación Sindical de Empleados ANEBRE (fl. 704 a 720), de ellas no se extrae el tratamiento que se le debía dar a tal rubro respecto de las pensiones de jubilación, únicamente y como aparece probado dentro del proceso a partir del Acuerdo Conciliatorio celebrado por el Banco de la República y la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República -ANEBRE-, realizado en la ciudad de Melgar (Tolima) entre el 26 y el 28 de junio de 1996, firmado el 8 de julio de 1996 y con nota de deposito del 10 de julio de 1996, se dispuso que la prima de vacaciones haga parte de los factores que se entienden por salario para la liquidación y el pago de prestaciones sociales legales y extralegales, lo mismo que para la liquidación de la compensación de vacaciones, siendo procedente resaltar que esta prebenda únicamente tiene vigencia a partir de la suscripción del Acuerdo, pues así se dejó establecido en sus renglones:”...

“...”

“Se aprecia entonces que las pensiones de jubilación de los demandantes oscilan entre los años 1951 y 1991, todo lo cual conduce a concluir que la prima de vacaciones no podía hacer parte de los conceptos salariales del último año de servicios para obtener el monto de la pensión de jubilación de los demandantes, no solo porque para la época en que algunos de ellos se pensionaron no estaba establecida esta prebenda, sino porque fue elevada a factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales legales y extralegales a partir del mes de julio de 1996 como quedó expresado a más espacio”.

“...No obstante encontrarse dilucidado este punto, la Sala estima que es importante analizar el fenómeno de la prescripción, el cual se constituyó en el fundamento básico de la decisión adoptada por el A quo.

“...”

En punto a la prescripción, la Sala considera que los derechos reclamados a través de este proceso se encuentran prescritos, pues si nos detenemos en las reclamaciones que los actores elevaron ante el Banco demandado visibles a folios 3 a 90 del expediente, resulta fácil visualizar que fueron recibidas por la empleadora en el mes de diciembre del año 1997, y como ya quedó dicho en párrafo anterior las pensiones de los actores fueron reconocidas entre los años 1951 y 1991, es decir que el plazo trienal a que se refieren las normas

en cita, transcurrió en silencio sin que los actores hubieran manifestado su inconformidad con sus pensiones hasta el año 1997.

No obstante ser de suma aceptación que el derecho a reclamar un derecho pensional es imprescriptible, también lo es que sobre los factores que constituyen la base salarial para extraer el monto de la pensión, sí opera el fenómeno de la prescripción, pues la Sala no considera exiguo el término de tres años contados a partir de la fecha en que se reconoce la pensión, para intentar su reliquidación o reajuste si eventualmente hubiere lugar a ello...”

Con respecto a los reajustes solicitados por los actores en un 58,98%, y la aplicación de las leyes: 4a de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, el Tribunal manifestó:

“Del examen del material probatorio recaudado se rescatan Resoluciones expedidas por el Banco demandado, mediante las cuales se autorizan los reajustes sobre las pensiones de los actores así: La Resolución 62 de 1967 (fl. 445), La Resolución 032 de 1967 (fl. 533), Resolución Nro. 034 de 1967 (fl. 561), Resolución 057 de 1971 (fl. 563). Asimismo existen actas de Junta Directiva del Banco de la República que acogen las propuestas de reajuste de las pensiones de jubilación (fls. 604 a 613).”

“...Pero, si en gracia de discusión se pudiera aceptar como lo pretenden los demandantes que existe la omisión que se le endilga al Banco de la República al haberle dado aplicación en valor inferior a algunos reajustes sobre sus pensiones de jubilación, es preciso indicar que sobre esta pretensión también opera el fenómeno de la prescripción, pues si bien se aplica con respecto a los factores salariales que constituyen el salario base para extraer el monto de la pensión de jubilación, con mayor razón para lograr un reajuste, ya que debió hacerse la correspondiente reclamación antes del cumplimiento del plazo trienal contemplado en el artículo 488 del C.S.T. y 151 del C. P. L. y S.S., porque se repite las pensiones que se aluden en el presente proceso fueron otorgadas entre el año 1951 y el año 1991, y la reclamación únicamente aparece presentada y recibida por el Banco en el mes de diciembre de 1997, lapso de tiempo que rebasa los tres años otorgados por la normatividad citada”.

III-. RECURSO DE CASACIÓN

Los demandantes promueven demanda de casación con el objeto que la Corte:

“...case la providencia impugnada, que en la sede subsiguiente de instancia revoque la sentencia del a-quo y que, en su lugar, condene al banco... a reconocer a los demandantes las pretensiones indicadas en la demanda inicial, aplicando la prescripción solamente a las mesadas pensionales que se hubieran causado con más de tres años de anterioridad al 16 de diciembre de 1.997, fecha en que interrumpieron la prescripción.”

ÚNICO CARGO

“La sentencia impugnada es violatoria, por infracción directa, del artículo 53 de la C.P. y por interpretación errónea de los artículos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T.S.S., en relación con los artículos 19 del C.S.T., 1527, 1625, 2512, y 2535 del C.C. y 136 del C.C.A. (44 de la Ley 446 de 1.998), infracción legal que produjo, como consecuencia, la aplicación indebida de los artículos 19, 20, 55, 127, 128, 260, 467, 468 y 469 del C.S.T., 37 y 38 del Decreto 2351 de 1.965 (3° de la Ley 48 de 1.968), 2 de la ley 10 de 1.972, 19 del Decreto 2617 de 1.973, 11 del Decreto

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO

Lo anotado, conllevó además a la interpretación errónea de las normas que regulan la prescripción de las acciones.

RÉPLICA

IV-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

No hay lugar a que esta Sala de la Corte retome la interpretación o doctrina ya rectificadora y entre a modificar en esta oportunidad, la posición jurisprudencial que actualmente impera y que

aparece plasmada en la sentencia del 15 de julio de 2003 radicado 19557, según la cual se arribó a la conclusión contraria a la tesis que se venía sosteniendo de tiempo atrás sobre la imprescriptibilidad de la incidencia de los factores a tomar para integrar la cuantía de la correspondiente mesada inicial. Al respecto, en reciente sentencia radicada bajo el número 34749 del 20 de junio de 2009, en un caso similar en contra de la misma demandada, la Sala Laboral estableció que:

“En efecto, en los términos en que en esta oportunidad la parte recurrente propone la rectificación de un criterio jurisprudencial, es pertinente comenzar por anotar que la Corte como tribunal de casación no está atada de manera absoluta y perpetua al sentido asignado a un determinado tema, por más inveterado que sea el pronunciamiento que lo contenga, pues un nuevo examen juicioso y razonable, desde luego hermenéutico conforme a la ley y la Constitución, ajustado a la realidad jurídica, política y social del momento puede llevar a la Sala a cambiar los anteriores lineamientos doctrinales que se habían dejado sentados, al estimar que jurídicamente no eran atinados. Al respecto esta Corporación en decisión del 23 de enero de 2003 radicado 18970 y reiterada en casación del 21 de marzo de 2007 radicación 29998, puntualizó:

“(.....) Adicionalmente no es adecuado referirse a criterios jurisprudenciales existentes, en tanto rigurosamente en el ámbito judicial solamente existe una, desde luego que los salvamentos de voto o posiciones minoritarias no constituyen jurisprudencia, como tampoco las doctrinas anteriores rectificadas o corregidas, esto por cuanto la Corte puede modificar su posición en un determinado aspecto en tanto obviamente tampoco está atada por los criterios que haya adoptado en el pasado si encuentra que jurídicamente no eran los más acertados”.

“Conviene apuntar que el tema de la imprescriptibilidad del derecho a solicitar la pensión de jubilación o de vejez, ha tenido su desarrollo en la jurisprudencia adoctrinada, bajo el entendido que por ser de carácter vitalicio puede reclamarse en cualquier época y por tanto no admite una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como sí ocurre con otros derechos; aspecto que de tiempo atrás ha merecido reproches fundados en la numerosa literatura doctrinal que durante varios lustros se ha producido, que comprende entre otros tópicos, el extremo temporal y la discusión relativa a la prescripción de los factores salariales a tomar para el reconocimiento o liquidación del monto de la primigenia mesada pensional, que fue como quedó visto lo que produjo el cambio de postura varias veces mencionado en este fallo.

“En este orden de ideas, se insiste en que la variación de una posición jurisprudencial, para el caso en torno de la institución jurídica de la prescripción frente a los componentes que constituyen la base salarial de una pensión, de manera alguna quebranta las normas denunciadas y menos los postulados acrisolados que gobiernan el artículo 53 de la Constitución Política, máxime cuando el derecho al trabajo tiene una constante evolución que amerita una dinámica jurisprudencial, en aras de lograr la justicia y la paz social en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio armónico como bien lo señala el artículo 1° del Código Sustantivo del Trabajo, que es lo que da la fuerza, sostenibilidad, credibilidad y estabilidad jurídica al instituto del derecho del trabajo.

“En la sentencia que la parte recurrente rememora en la sustentación del cargo, valga decir, la radicada bajo el número 28904 que data del 19 de julio de 2006, proferida en un asunto análogo seguido contra la misma entidad aquí demandada, y reiterada en decisión del 21 de marzo de 2007 radicado 29998, la Corte le dio respuesta a los planteamientos centrales e inconformidades que en la presente acusación se esgrimen, donde en esa oportunidad se dijo:

“...”.

“Surge de ello, la necesidad de distinguir entre el criterio reiterado de la jurisprudencia de la imprescriptibilidad en sí mismo del status de pensionado, que solo desaparece de la vida jurídica, en principio, por la muerte del extrabajador, y lo relativo a la base salarial que debe tomarse para el reconocimiento del monto de la primera mesada pensional.

“En efecto, importa recordar que la Corte, en sentencias como a las que alude el recurrente y, más recientemente, entre otros fallos, los de 23 de julio de 1998 (Radicación 10784) –que remite a sentencias de 26 de mayo de 1986 (Radicación 0052) y de 6 de febrero de 1996 (Radicación 8188)-; y de 26 de septiembre de 2000 (Radicación 14184) –que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26 de mayo de 2000 (Radicación 13475--), para citar apenas algunos ejemplos, afirmó, en suma, “la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo” por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la prescripción de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieren cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho laboral; y la de los reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades que se percibieron sin que aquél hubiera objetado su cuantía durante el mismo término.

“Ahora bien, que ciertos estados o, en mejores términos, “situaciones jurídicas” como el estado civil de las personas, las derivadas de las relaciones de familia, en materia laboral, el status de pensionado, etc., sean imprescriptibles, no desconoce que los derechos crediticios surgidos de éstas o de cualquiera otra clase de obligación correlativa sí lo son. Al punto, importa recordar que las acciones surgidas de la relación de trabajo son de carácter personal, que entrañan créditos de carácter económico, como los salarios y prestaciones sociales, las cuales se pueden extinguir por no haber sido ejercidas por su titular en el tiempo que para el efecto concede la ley laboral.

“Sin que implique cambio de jurisprudencia –sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional en sí– debe precisarse que una cosa es el status o calidad de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento –criterio jurisprudencial que se reitera-; y otra, la de los factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social amplía a todas ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’ del trabajo.

“Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (Sentencia de 21 de octubre de 1985, Radicación 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en los términos de las citadas normas laborales.

“No aparece entonces razonable afirmar la extinción de los créditos sociales del trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por constituir parte de la base económica de la prestación pensional. Lo lógico y legal es que al producirse la prescripción de la acción personal del trabajador respecto de acreencias laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas comportan se extingan y que no sea posible considerar su existencia para ningún efecto jurídico, dado que al desaparecer del mundo jurídico entran al terreno de las obligaciones naturales que, como es sabido, no tienen fuerza vinculante.

“Según lo dicho, como la época de causación del derecho pensional puede o no coincidir con la del establecimiento del monto de la pensión –no de su reconocimiento, que es cosa distinta-, por ser lo cierto que no necesariamente aquélla concuerda en el tiempo con el retiro del servicio del trabajador, que es el que permite, generalmente, fijar la época que cobijan los cálculos necesarios para determinar el monto de la prestación, habrá de distinguirse si los factores salariales que son objeto de reclamo por el pensionado fueron o no pagados por el empleador y, en caso de no haberlo sido, si hubo o no reclamación. En el primer evento, esto es, cuando fueron pagados los presuntos factores salariales base de liquidación, la acción personal del pensionado prescribirá transcurrido el término que para tal efecto prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello a partir de la fecha del reconocimiento de la pensión; y en el segundo, es decir, cuando no fueron pagados los factores discutidos por el pensionado como no incluidos en la base de la liquidación, se torna vital el momento u oportunidad para que el acreedor durante el término hábil, contado a partir de la exigibilidad de éstos, exija los créditos no satisfechos, porque de lo contrario, si prescribió el derecho a ese pago como factor salarial autónomo, igual suerte tiene el reajuste pensional impetrado por esa causa.

“Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el derecho a que éste sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del

derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido éste por prescripción no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.

“Las razones expuestas llevan a la Corte a modificar su jurisprudencia –en éste aspecto puntual- por ser claro que la prescripción extintiva contemplada en la ley, específicamente en materia laboral, provee la certeza que es necesaria a la relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que de ella se derivan y, en tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las partes, saneando situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, conducirían a mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la vida de los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión>.

Y ya en fecha más reciente, en la sentencia del 18 de febrero de 2004, radicación 21.231, en un proceso en el que fungió como demandado el Banco de la República, en asunto similar al presente, asentó:

“<si para el caso se estimaba tener derecho a que se incluyera como factor salarial para establecer el salario base para tasar la pensión de jubilación lo pagado al demandante por prima de vacaciones en el último año de servicios, la exigibilidad de esa obligación empezaba desde la fecha en que se reconoció y, por consiguiente, se cuantificó por la demandada la mesada pensional de éstos, y respecto a los aumentos anuales a partir de la fecha en que los preceptos que lo regulan lo ordenan. Esto porque en uno y otro caso, es a partir de esa data que el interesado tenía la posibilidad de acudir a la justicia para reclamar el reajuste pertinente ante el desconocimiento por parte del obligado al pago íntegro de la prestación.

“Por lo tanto, teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión de jubilación a los demandantes que resultaron favorecidos con la sentencia que se quiebra, como también la data en que se debía hacer el incremento ordenado por la ley 10 de 1972, e igualmente aquella en que se presentó la reclamación directa a la demandada por esos conceptos, ninguna duda queda que cuando se presentó la demanda el derecho a obtenerlos, por lo dicho al estudiar el recurso de casación, estaba prescrito porque ya habían transcurrido más de los tres años previstos en las normas legales para que ese modo de extinguir las obligaciones opere en el campo laboral y de la seguridad social.>

“La Corte no ha confundido hechos con derechos, como equivocadamente cree el recurrente. Para la Corporación es indiscutible que son los derechos los que prescriben y no los hechos. Justamente, cuando a un trabajador se le liquida de manera errada una prestación, tal hecho es susceptible de ser discutido. Entonces, surge a partir de allí un derecho de reclamar contra la conducta irregular, como cuando se liquida mal el ingreso base de liquidación para fijar la mesada pensional. Y, correlativamente, emerge para la entidad de seguridad social, o para el empleador, según el caso, la obligación de corregirla. Pero no tiene ese específico derecho un rango de perpetuidad, que ninguna norma le otorga. Muy distinto al carácter vitalicio otorgado a la prestación jubilatoria propiamente tal, imprescriptibilidad que no se opone, sin embargo, a la extinción del derecho a disfrutar las mesadas de tres años hacia atrás por la inercia del beneficiario. Adviértese en todo caso que, no empece la asimilación al salario de un trabajador, el ingreso mensual del pensionado se pierde por prescripción extintiva.

“Por último, es evidente –como señala la replicante- la impertinencia de los ejemplos traídos a colación por el censor. Incluso, el alusivo al auxilio de cesantía es discordante y sirve de ilustración para mostrar que una prestación tan sensible e importante en el derecho laboral también está sometida al rigor de la prescripción.

“Pero más valiosa para estimar razonada la tesis actual de la Corte sobre la prescripción del derecho a reclamar la reliquidación de la base salarial de la pensión, es lo atinente a la revisión de las pensiones públicas tema planteado en el recurso. “Pues bien, no está de más recordar que fue necesario modificar la ley para proceder a ello, porque, sin lugar a dudas, pesaba contra el derecho de reclamación del Estado la indefectible caducidad de la acción administrativa y la prescripción laboral. Y siendo cierto, como lo sostiene el censor, que se trata de un tema o de una institución especial, debió el Legislador consagrar una excepción para establecer el privilegio aludido a favor de las entidades públicas con cargas pensionales, con la exclusiva finalidad de proteger el patrimonio público afectado por actos de corrupción suficientemente conocidos. Ese tratamiento desigual fue avalado por la Corte Constitucional por razones apenas obvias.

“El Tribunal no se enfrentó ante la encrucijada de escoger entre dos interpretaciones válidas respecto del tema de la prescripción del derecho objeto del litigio que dio lugar al recurso sub examine, como tampoco se halla abocada la Corte a una situación semejante. Por tanto, no viene al caso la aplicación del principio in dubio pro operario, ni el de la condición más beneficiosa. Todo lo anterior permite concluir que no incurrió el juzgador de instancia en los yerros jurídicos que le enrostra la censura. (Resalta fuera del texto)

“La censura al criticar la decisión antes transcrita (radicado 28.904), argumentó que esta Sala de casación “de manera inexplicable, soslayó el estudio de esa misma controversia jurídica”, bajo una argumentación carente de fundamento cuando estimó que no procedía en esta clase de controversias la aplicación del principio in dubio pro operario, porque el Tribunal como la Corte no estaban enfrentados ante la encrucijada de escoger entre dos interpretaciones válidas respecto

del tema de la prescripción del derecho objeto del litigio; para lo cual aseveró en el desarrollo del cargo que en el asunto a juzgar sí tiene cabida el principio de favorabilidad, porque concurren dos interpretaciones opuestas, una de las cuales que es la nueva doctrina, desfavorece a los pensionados demandantes frente a la interpretación anterior, pues “la Sala de Casación Laboral sin que mediara un cambio de la Legislación” no podía cambiar el criterio de antaño, por virtud de que “su doctrina de más de sesenta años hacía parte integrante de los preceptos legales que regulaban la materia y el Principio de Progresividad, insoslayable en el Derecho del Trabajo, impedía alterar, y menos invertir, esa esencia normativa que se había integrado a los preceptos legales por la doctrina jurisprudencial, sin que al respecto hubiera el Legislador expedido nuevos preceptos que regularan la materia.”

“Para descartar esta argumentación de la parte recurrente, basta con reproducir y reiterar lo dicho por esta Sala de la Corte en la sentencia atrás invocada del 21 de marzo de 2007 radicado 29998, en la que en un asunto con iguales características y adelantado contra el mismo Banco de la República, señaló:

“(…) la jurisprudencia no se incorpora a la Ley, puesto que conforme a los parámetros del artículo 230 de la Constitución Política, es meramente un criterio auxiliar de la actividad judicial, que como se dijo es susceptible de ser modificada cuando las circunstancias así lo ameriten, esto es, que de acuerdo con los novedosos planteamientos que propongan los litigantes o expongan los jueces o tribunales, se encuentre que jurídicamente los criterios que se venían adoptando sobre un determinado aspecto no resultan los más afortunados o acertados.

Del mismo modo, es de destacar, que el principio del in dubio pro operario o de favorabilidad opera respecto del conflicto de normas vigentes, más no frente a dos pronunciamientos jurisprudenciales, pues sólo puede encontrarse vigente un criterio jurisprudencial que es el acogido por la mayoría o todos los integrantes de una Sala de decisión, y las demás posiciones sólo tienen el carácter de criterios minoritarios o doctrinas jurisprudenciales revaluadas que como tales no unifican la jurisprudencia nacional y eventualmente solo pueden servir de citas doctrinales.

Adicionalmente, en lo concerniente a la no cabida del principio de favorabilidad para poder aplicar una jurisprudencia que le favorezca más a una de las partes comprometidas en el litigio, esta Corporación en sentencia del 19 de octubre de 2006 radicado 27425, igualmente sostuvo:

<La anterior es la posición actual de la Sala, que se mantiene, pues no exhibe el cargo argumentos suficientes, ni aparecen circunstancias nuevas, que ameriten su cambio. El hecho de que en el pasado, en algunas oportunidades, se hubiere sostenido lo contrario, como son los fallos a que se refiere la censura, no conlleva a que deba acudir al principio de favorabilidad, para aplicar la jurisprudencia más favorable, pues éste se da frente a un conflicto de normas vigentes, y como regla general de interpretación debe seguirse es la establecida en el artículo 18 del C. S. T., de tomar en cuenta que la finalidad primordial de dicho ordenamiento es la de <lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social>, al cual se ajusta el derrotero jurisprudencial que, para dilucidar el cargo, ahora se reitera en su integridad>.

“En las anteriores circunstancias, de verdad que, no erró el fallador de alzada al inferir apoyado en la actual postura jurisprudencial de la Corte que se mantiene, que la solicitud de los demandantes para reliquidar la pensión de jubilación que les fue reconocida, por la no inclusión

del factor salarial de la prima de vacaciones, está prescrita al haber transcurrido desde el momento en que se hizo exigible el derecho, el término trienal regulado en los artículos 151 del C. P. del T. y de la S.S. y 488 - 489 del C. S. del T., y por ende no cometió ninguno de los yerros jurídicos endilgados, con acogimiento estricto de los postulados legales y constitucionales protectoras de los derechos fundamentales.

Por lo demás, se debe indicar que el censor orientó su cargo por la vía directa, de lo cual se infiere que éste acepta los hechos declarados por el Tribunal. De hecho, en la demostración del cargo, el censor no cuestiona que el ad quem haya dado por acreditado que a las pensiones reconocidas a los demandantes se les aplicaran los incrementos legales y extralegales, el cual es el argumento principal por el cual se absolvió a la demandada del reajuste de pensiones, pretendido por los actores en un 58,98% en 1975 y en los años posteriores, en virtud de las leyes: 4a de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, según su respectiva vigencia.

Así las cosas, al no ser atacado dicho pilar de la sentencia y, en consecuencia, al no destruir la presunción de legalidad de la cual se encuentra investida, también se mantendrá incólume ésta en cuanto a la solicitud del demandante de que se declare que las pensiones de los actores no se habían reajustado de acuerdo a las diferentes leyes citadas por él.

Baste lo anotado, para concluir que no prospera el cargo.

En ese orden de ideas, no se casará la sentencia recurrida.

En consideración al resultado del recurso, y por ser objeto de réplica, se condenará en costas a la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de enero de 2007 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario de ARTURO DELGADO ACOSTA, SERVIO TULIO DÍAZ TORRES, IRMA TERESITA DE JESÚS DORADO PARDO, BETTY ESPINOSA DE VALBUENA, RODOLFO FUQUENE SILVA, EFRAIN ANTONIO GALEANO GÓMEZ, VÍCTOR MANUEL GAMA MONTAGUT, ELENA GARCÍA DE LÓPEZ, JORGE ARGEMIRO GARCÍA GARCÉS, ANA ROMELIA GARZÓN ROZO, PEDRO GUTIÉRREZ L., JOSELYN HURTADO FIGUEROA, DARÍO JARAMILLO BOTERO, LIBARDO LANCHEROS VELÁSQUEZ y MARGARITA LEÓN TELLEZ contra el BANCO DE LA REPÚBLICA.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Eduardo López Villegas

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

Luis Javier Osorio López

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

CAMILO TARQUINO GALLEGU

ISAURA VARGAS DÍAZ

□

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
Normograma de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
ISSN 2256-1633
Última actualización: 31 de agosto de 2019

